



NUE 171-A-2019 (AC)

Ruíz Cruz contra Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las catorce horas con diez minutos del quince de octubre de dos mil diecinueve.

1. Descripción del caso:

I. El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Óscar Antonio Ruíz Cruz**, en adelante el apelante, en contra de la resolución MARN-OIR N°199-2019, emitida por la oficial de información del **Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales** (en adelante **MARN**), que denegó información consistente en:

1. Listado de trámites y estado actual del proceso de permiso ambiental que están siendo agilizados bajo la orden emitida por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente;

2. Criterios técnicos que ha definido el MARN, para el proceso de agilización de trámites de dichos permisos ambientales;

3. La fecha de inicio y finalización del período de 100 días otorgados por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la agilización de los permisos ambientales.

En ese orden, la oficial de información del **MARN** resolvió: "Todos los proyectos que se encuentran en proceso de evaluación es información reservada conforme al Art. 19 literal "e" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual se lee así: es información reservada: literal e: la que contenga opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto que no sea adoptada la decisión definitiva".



Al respecto, el apelante manifestó que a su criterio, su derecho de acceso a la información pública ha sido obstaculizado en su pleno ejercicio, puesto que la OIR-MARN denegó la entrega de información solicitada alegando que la misma recae dentro de la causal mencionada en el artículo 19 literal “e” de la LAIP; esta causal ha sido entendida como aquella que restringe el acceso a la información requerida debido a que se desea evitar la intervención de agentes externos que puedan determinar la conclusión de un proceso de toma de decisiones, en donde el funcionario público responsable o el órgano colegiado debe hacer un ejercicio de interpretación de la norma y de argumentación, considerando que dicha causal no es aplicable, dado que el permiso ambiental, de conformidad a la Ley de Medio Ambiente, es un acto administrativo, el cual deberá dictarse dentro del marco jurídico vigente, sin caer en discrecionalidades, puesto que los criterios técnicos son lineamientos institucionales básicos que se deben considerar en el proceso de toma de decisión en el otorgamiento o no del permiso ambiental.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado **José Alirio Cornejo Najarro** para instruir el procedimiento y elaborar el proyecto de resolución.

En el informe justificativo, la oficial de información ratificó su postura, remitiendo copia certificada de Declaración de Reserva 001/2016, emitida el 17 de febrero de 2016.

II. La audiencia oral se llevó a cabo, solo con la comparecencia del MARN a través de la apoderada general judicial con cláusula especial, licenciada **Ethel Elizabeth Cabrera de Valdez**.

El MARN, a través de su apoderada ratificó la postura del ente, sobre el impedimento de brindar información de un proceso que todavía está en trámite de deliberación por parte del ministerio, conforme al Art. 19 literal e) de la LAIP. Respecto a los otros requerimientos de listado de procedimientos para agilización de trámite, ese listado no existe, porque el titular el MARN no recibió ninguna orden, solicitud o lineamiento de la presidencia de la república, para autorizar determinado número de permisos ambientales y sobre el estado de los que se están diligenciando, no se puede entregar mientras no se emita el permiso como tal, ya emitido se procede a subirlo al portal del Ministerio por ser información oficiosa.

Análisis del caso:

Para resolver la controversia se analizará el caso de la siguiente manera: (I) Breve referencia al Derecho de Acceso a la Información Pública (DAIP) (II) Examen sobre el cumplimiento de requisitos de la declaratoria de reserva, y, (III) Determinación de la naturaleza de la información, con la consecuente obligación de entregarla, según precedente. OC

I. El derecho de acceso a la información pública (DAIP) es un derecho constitucional “implícito”; es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.), pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Constitución. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o información de toda índole, pública o privada, que tengan “interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del Estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a la información en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

Es importante señalar que la LAIP contempla como una manera de acceso, la presentación de una solicitud ante el oficial de información. Dicha solicitud puede ser de forma escrita, verbal electrónica o por cualquier otro medio idóneo, según el Art. 66 de la LAIP. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha manifestado al respecto, en el sentido que: en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación [de manera que] toda la información en poder del Estado se presuma *pública y accesible*, sometida a un régimen limitado de excepciones¹.

Sin embargo, el DAIP no es absoluto, puesto que es susceptible de restricciones que condicionan su pleno ejercicio, no obstante, los límites del derecho de acceso a la información no pueden ser arbitrarios, sino que deben estar previamente establecidos por el legislador, de esta manera se previene que la Administración Pública utilice

¹ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.



discrecionalmente argumentos encaminados a negar la información que solicitan los ciudadanos.

Uno de los límites a este derecho es la **información reservada**, la cual se define como aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con la LAIP—específicamente en el Art. 19 de la LAIP—, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas —Art. 6 letra “e” de la LAIP—.

El titular del ente obligado es el encargado de clasificar la información tomando en cuenta la legalidad, temporalidad y razonabilidad del porqué se decide excluir temporalmente la información; una vez ha concluido el plazo de reserva, la información vuelve a ser pública y por lo tanto puede ser solicitada por cualquier persona en virtud del DAIP. Es importante señalar que **las causales establecidas en el Art. 19 de la LAIP son taxativas y no pueden invocarse otras que no estén señaladas en la ley.**

II. Para el caso en comento, el ente obligado denegó la información alegando que la misma se encuentra reservada con base en el Art. 19 literales e), g) y h) de la LAIP, según copia certificada de Declaración de Reserva 001/2016, emitida el 17 de febrero de 2016.

En ese sentido, el principio de publicidad establece que el acceso a la información pública es la regla general, mientras que la reserva de la misma es la excepción en casos puntuales; tiene su límite cuando existe una disposición legal anterior de interpretación restrictiva y que, conforme a la Constitución, esté justificada en razones que respondan a un interés superior o a un posible perjuicio directo o inminente para el Estado, persona o personas determinadas.

Sin embargo, el mismo puede contener información que puede ser catalogada como reservada, ello debe entenderse en el sentido que no puede haber negativas o restricciones genéricas, sino solo referidas a casos concretos y a necesidades puntuales. Dicho de otro modo, la negativa genérica, injustificada o cualquier restricción arbitraria al derecho de acceso a la información significará un incumplimiento o un abuso de los deberes de su cargo por parte del funcionario que así se pronuncie o actúe (Cfr. PIERINI, Alicia y LORENCES, Valentín, Derecho de acceso a la información, Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 159).

El **MARN** fundamenta la reserva de la información requerida por la apelante, en la causal del art. 19 letra “e” de la LAIP, la cual expresa: *“La que contenga opiniones o recomendaciones que forman parte del proceso deliberativo de los servidores públicos en tanto no sea adoptada la decisión definitiva”*. Hace referencia a los procesos de toma de decisión, donde el funcionario público responsable o el órgano colegiado deben hacer un ejercicio de interpretación de la norma y de argumentación que justifique y fundamente su conclusión final.

También hace uso de la causal establecida en el art. 19 letra “g” de la LAIP, la cual expresa: *“La que comprometiére las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso”*. Esta causal se refiere a los procedimientos en curso tramitados por los entes obligados; por lo que, la reserva de la información fundamentada en esta causal solo dura hasta que se adopte la decisión final.

Asimismo, invoca la causal contenida en la letra “h” de la precitada disposición legal, la cual establece: *“la que pueda generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero”*, haciendo referencia a aquella información que genere una ventaja incorrecta e ilegal a favor de una persona, afectando así a otra.

Ahora bien, este Instituto ha sostenido reiteradamente que para la validez de una declaración de reserva se necesita la concurrencia de tres caracteres o requisitos: (a) legalidad, (b) razonabilidad y (c) temporalidad, y que ante la ausencia de uno de ellos debe desclasificarse la información.

(a) Legalidad. La facultad que tienen las autoridades para reservar cierta información debe enmarcarse en el ordenamiento legal vigente, a fin de garantizar que los límites al ejercicio del DAIP estén dirigidos a la protección de otros derechos de idéntica o superior importancia.

(b) Razonabilidad. Es necesario que se razone y fundamente la adopción de esta limitación, pues con ello se busca reducir la arbitrariedad en las actuaciones de los funcionarios con potestad para declarar la clasificación de la información pública en reservada. En esencia, no basta con enunciar los motivos que conllevan al ente obligado a



declarar la reserva, sino que tales argumentos deben ser jurídicamente válidos, en la medida que no se establezca un límite arbitrario al DAIP.

(c) **Temporalidad.** Se refiere a que la restricción del acceso a la información debe estar sujeta a un plazo definido, establecido en el Arts. 20 de la LAIP y 31 letra “f” de la RELAIP; y es que, si no se establece el plazo de reserva podría vulnerarse el DAIP de las personas, al generar incertidumbre sobre el momento en que la información estará a su disposición.

(a). Para que se cumpla con el requisito de **legalidad** no basta la mera invocación de las causales en que se fundamenta la declaratoria de reserva, sino que, es también indispensable acreditar que se cumple con las condiciones necesarias para su aplicación; es decir, que los hechos y circunstancias del caso se ajustan a lo previsto por la ley.

En ese orden, cabe recalcar que el **MARN** pese a que compareció a las etapas procesales durante la tramitación del presente procedimiento, nunca remitió por parte de la oficial de información algún documento donde se motivara y razonara las circunstancias que acreditan la reserva de la información requerida. Por lo que, la única documentación con la que el ente obligado pretende acreditar la reserva invocada, es “copia certificada de Declaración de Reserva 001/2016, emitida el 17 de febrero de 2016.

Ahora bien, es conveniente realizar un análisis de los hechos comprobados con lo establecido en la LAIP en su art. 19 para declarar la reserva de la información. El artículo 6 de la LAIP literal “e” menciona que se entenderá por información reservada “...*aquella información pública cuyo acceso se restringe de manera expresa de conformidad con esta ley, en razón de un interés general durante un período determinado y por causas justificadas*” (la negrita es propia). De dicha definición se puede establecer que para que una información pueda ser reservada de conformidad con la ley, esta debe ser expresamente mencionada en la declaratoria de reserva, no dando lugar a dudas respecto a qué tipo de información no se publicará y en qué período de tiempo.

El exigir que la reserva sea expresa tiene relación con el principio de seguridad jurídica y de legalidad de los artículos 2 y 86 de la Constitución, así como el principio de

máxima publicidad del art. 4 literal a) de la LAIP, en el sentido que los ciudadanos sepan de antemano cuál información pública no se encuentra a disposición y el tiempo en el cual ^{OC} permanecerá restringida, debiendo los entes obligados detallar de forma clara y precisa el tipo de información que no se divulgará. El consignar en la declaratoria de reserva información genérica, vulneraría el derecho a la información pública de los ciudadanos, pues permitiría a las instituciones un amplio margen de actuación para restringir arbitrariamente los documentos que pueden ser de conocimiento público.

En ese sentido, al analizar el contenido de copia certificada de la declaración de reserva 001/2016, emitida el 17 de febrero de 2016, este Instituto considera que el MARN se ha limitado a alegar la reserva de la información, basados únicamente en la mera invocación de las causales de reserva que regula el Art. 19 letras “e”, “g” y “h” de la LAIP, sin haber aportado el documento que declara la reserva del *listado de trámites y estado actual del proceso de permiso ambiental* solicitado. Entonces, dado que la reserva de la información adoptada por el ente obligado, no cumple con el requisito de legalidad, es innecesario valorar el cumplimiento de los otros dos (temporalidad y razonabilidad), pues para que esta sea válida se necesita la **conurrencia de todos ellos**.

Aunado a ello, según el criterio de este Instituto, lo requerido versa sobre un listado de los permisos en trámite para que sea emitido el permiso ambiental, consistente en la cantidad de procesos en trámite para la emisión del permiso ambiental, brindar esa información, no afectaría al MARN en sus argumentaciones o estrategias para asegurar su éxito en los procedimientos judiciales, y tampoco generaría una ventaja indebida entre los solicitantes del permiso ambiental.

Es importante destacar que la carga de la prueba corresponde al ente obligado, por lo que el MARN debió aportar todos los elementos idóneos para establecer que dicha información no debe o no puede ser revelada. En conclusión, en virtud que el MARN no logró acreditar la reserva del *“Listado de trámites y estado actual del proceso de permiso ambiental que están siendo agilizados bajo la orden emitida por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente”*, pues esto último no fue desvirtuado por el MARN, por lo que deberá entregar, de conformidad al Art. 5 de la LAIP, aquellos que están siendo impulsados a partir del primero de junio de 2019, ya que, se tiene por no cumplido el



requisito de la “legalidad” de la reserva invocada; por lo que al no reunir los requisitos necesarios para su adopción, es procedente que este Instituto revoque la resolución impugnada y declare justificado el acceso a la información solicitada, de acuerdo al Principio de Máxima Publicidad de conformidad al Art. 4 letra “a” y 5 de la LAIP y los principios de seguridad jurídica y legalidad de los arts. 2 y 86 de la Constitución de la República, por ser información de naturaleza eminentemente pública.

Ahora bien, el MARN, remitió correo electrónico donde se adjuntó copia simple de resolución MARN-OIR N°199-2019 modificada, enviada al apelante el 16 de septiembre y confirmando recepción el 18 de septiembre, donde se le hizo saber lo siguiente: *“teniendo en consideración que se respondió dicha solicitud vía correo electrónico el 16 de julio de 2019, sin embargo se procedió a realizar la verificación de la misma, habiéndose constatado que no existe un listado de trámites que hayan sido solicitados se agilizaran por parte del señor presidente de la república, por lo que se vuelve inexistente la información solicitada en sus tres requerimientos”*. (Sic).

“Considerando que la Ley de Acceso a la Información Pública dispone que el Art. 73 que nos encontramos ante un caso de información INEXISTENTE, lo que impide brindar lo requerido por el peticionario, esta dependencia resuelve: NO ENTREGA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA POR INEXISTENCIA”. (Sic).

Sobre este aspecto es importante acotar que **la clasificación de reserva y la inexistencia de información son conceptos que no pueden coexistir.**² Pues la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la entidad correspondiente, no obstante que la dependencia cuente con facultades para poseer o emitir dicha información. En este sentido, la inexistencia es una calidad que se atribuye a la información solicitada. Por otro lado, la clasificación de la información reservada es una característica que adquiere la información concreta contenida en un documento específico, siempre que se encuentre en los supuestos establecidos en el Art. 19 de la LAIP.

² Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia: NUE 23-D-2016 (El Salvador, 2016).

Lo afirmado por el **MARN** carece de razón, que en un principio la información se haya señalado como reservada para que luego fuese declarada como inexistente, porque la clasificación de información implica invariablemente la existencia de un documento o documentos determinados, mientras que la inexistencia conlleva la ausencia de los mismos en los archivos de la dependencia o entidad de que se trate³; por tanto, en nada modifica el razonamiento que se ha realizado sobre la reserva de información. O' C

III. 1. Asimismo, es de tomar en cuenta los otros dos requerimientos de información consistentes en: *Criterios técnicos que ha definido el MARN, para el proceso de agilización de trámites de dichos permisos ambientales; y,*

La fecha de inicio y finalización del período de 100 días otorgados por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la agilización de los permisos ambientales. [Handwritten signature]

La oficial de información en su calidad de apoderada del ente obligado, afirmó en audiencia que el **MARN** no recibió ninguna orden, solicitud o lineamiento de la presidencia de la república, para autorizar determinado número de permisos ambientales, por esa razón era inexistente tal información; sin embargo, no probó lo afirmado mediante algún documento donde se haya realizado una búsqueda de la información y posterior a esta, se emitiera la respectiva acta de inexistencia de esa información. [Handwritten signature]

Sobre lo anterior, este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, la siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad por las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.⁴

³ Criterio 029-10, "La clasificación y la inexistencia de información son conceptos que no pueden coexistir". Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

⁴ Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia: NUE 39-A-2013 (El Salvador, 2013).



Por otra parte, es atinente señalar que la inexistencia implica necesariamente que la información **no se encuentra en los archivos de la autoridad**; – es decir, se trata de una cuestión de hecho-; no obstante, que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.⁵

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto⁶, se han tomado como base los **criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que, en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo); iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) ésta deberá generarse o reponerse en los caso que sea posible”.

En ese sentido, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, **no deber ser utilizada como un límite al DAIP** de los solicitantes de la información pues

⁵ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

⁶ Instituto de Acceso a la Información Pública, Resolución Definitiva, Referencia: NUE 143-A-2017, (El Salvador, 2017).

deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

2. Por ende, ante la incongruencia de parte del **MARN** este Instituto considera que *O. C.* existe certeza de la generación y existencia de la información y conforme a los criterios emitidos anteriormente sobre la inexistencia de la información, es procedente revocar la resolución de la oficial de información y ordenar al ente obligado realizar las siguientes acciones:

Realizar una nueva búsqueda de los *criterios técnicos que ha definido el MARN, para el proceso de agilización de trámites de dichos permisos ambientales; y,*

La fecha de inicio y finalización del período de 100 días otorgados por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la agilización de los permisos ambientales, que no se limite a un solo registro, sino a otros archivos que objetivamente pueden resguardar dicha documentación.

Dichas diligencias deberán realizarse con el jefe de gestión documental y archivo. En el caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando todos los medios probatorios y los hechos que surjan en dicha diligencia.

Finalmente es preciso manifestar, que conforme a los hechos que surjan en las diligencias ordenadas, la Unidad de Cumplimiento determinará la pertinencia de notificar a otras entidades Estatales, para que determinen cualquier tipo de responsabilidad por parte del personal encargado de resguardar dicha documentación.

4. Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los Arts. 2, 6, 85 y 86 de la Cn; 52 Inc. 3°, 58 letra "d", 90, 94, 96 letra "d" y 102 LAIP; 79 y 135 de la LPA, este Instituto **RESUELVE:**

a) Tener por recibido escrito remitido por el **Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)** el 10 de octubre de este año.



b) **Revocar** la resolución emitida por la oficial de información del **Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN)**, del 16 de julio de este año, en cuanto deniega el acceso a la información relativa a *“Listado de trámites y estado actual del proceso de permiso ambiental que están siendo agilizados bajo la orden emitida por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente”*, por no haber demostrado que dicha información se encuentra reservada de conformidad con los requisitos legales establecidos, según lo expuesto.

c) **Ordenar** al **MARN** a realizar una nueva búsqueda de los *criterios técnicos que ha definido el MARN, para el proceso de agilización de trámites de dichos permisos ambientales; y, la fecha de inicio y finalización del período de 100 días otorgados por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para la agilización de los permisos ambientales*, que no se limite a un solo registro, sino a otros archivos que objetivamente pueden resguardar dicha documentación. Dichas diligencias deberán realizarse con el Jefe de Gestión Documental y Archivo. En el caso de no encontrarse la información en controversia, se deberá declarar su inexistencia, relacionando todos los medios probatorios y lo hechos que surjan en dicha diligencia.

d) **Ordenar** al **MARN** que a través de su oficial de información, dentro del plazo de **cinco días hábiles** contados a partir del día siguiente a la notificación de esta resolución, proporcione a **Óscar Antonio Ruíz Cruz** el *“Listado de trámites y estado actual del proceso de permiso ambiental que están siendo agilizados bajo la orden emitida por el Presidente de la República al Ministerio de Medio Ambiente”*, por ser información pública.

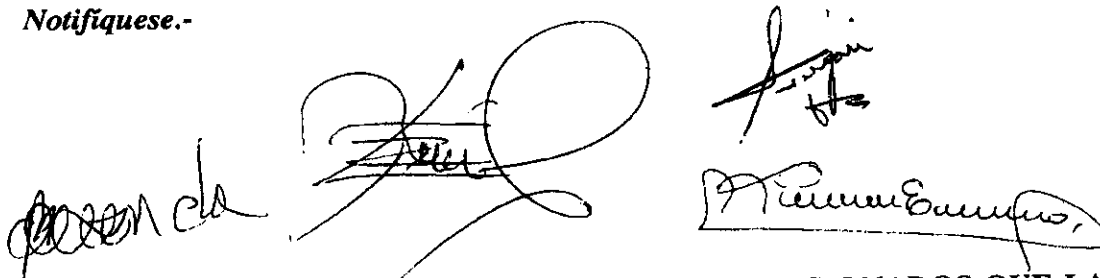
e) **Ordenar** al **MARN** que dentro de las veinticuatro horas posteriores al vencimiento del plazo anterior, remita a este Instituto un informe de cumplimiento de la obligación contenida en la letra b) de esta parte resolutive, el cual incluya un acta en la que conste la documentación entregada al apelante, así como su recepción, y una copia del índice de información reservada actualizado, bajo pena de iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. Este informe puede ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

f) **Hacer saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

g) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para verificar la eficacia de esta resolución.

h) **Publíquese** esta resolución oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN

IV/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los cuatro días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP



